

**El número de asuntos en trámite en Madrid se ha reducido un 14,2 por ciento, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 8,2 por ciento**

Uno de los principales factores que permiten valorar el grado de funcionamiento de los órganos judiciales es el de la pendencia de asuntos, esto es, el número de procedimientos que al final del año han quedado sin resolver, en comparación con los que había al comienzo del año.

En este aspecto, la marcha en general de los juzgados y tribunales madrileños durante el año 2016 puede considerarse relativamente buena, ya que el número de asuntos en trámite se ha reducido en un 14,2%, muy por encima de la media nacional, que lo hizo en un 8,2 por ciento. Comunidades como Cataluña o Andalucía, de un tamaño judicial similar, están muy lejos de estas cifras, con una reducción del 1,20 por ciento y del 4,8 por ciento respectivamente.

Este descenso ha sido más acusado en las jurisdicciones Contencioso-Administrativa (un 23,7%) y Penal (un 17%), y menos importante, aunque significativo, en las jurisdicciones Social (un 13,1%) y Civil (un 10,8%).

La principal circunstancia que ha influido en este resultado favorable es la reducción del número de asuntos ingresados en un 38,9%. Este descenso ha sido muy destacable en la jurisdicción Penal, con un 49,9% menos, y menos acentuada en las demás: un 17,8% en la Civil, un 11,4% en la Contencioso-Administrativa y un 3,9% en la social).

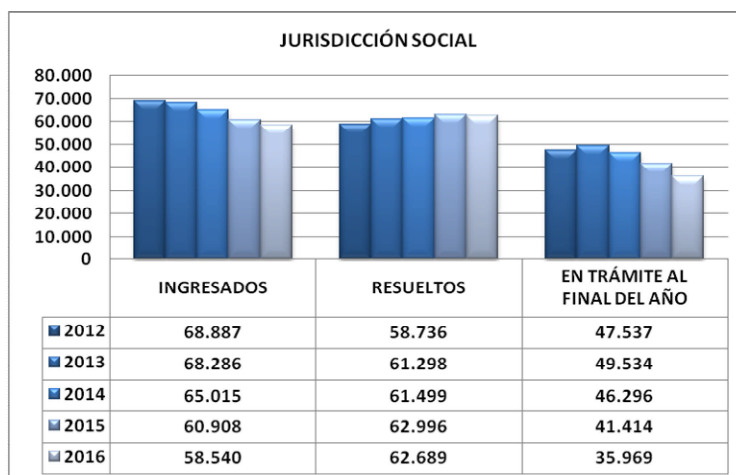
Aunque el número de asuntos ingresados ha disminuido el citado 38,9 por ciento, la tasa de litigiosidad (el número de asuntos registrados por cada 1.000 habitantes) sigue situándose en Madrid por encima de la media nacional: 125,1 frente a 124,9.

En números absolutos, durante el año 2016 se registraron en los órganos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un total de 808.915 asuntos, y se resolvieron 867.199: quedaron, por tanto, pendientes a final de año 303.024, una cifra sensiblemente inferior a la existente al acabar 2015, que fue de 352.755.

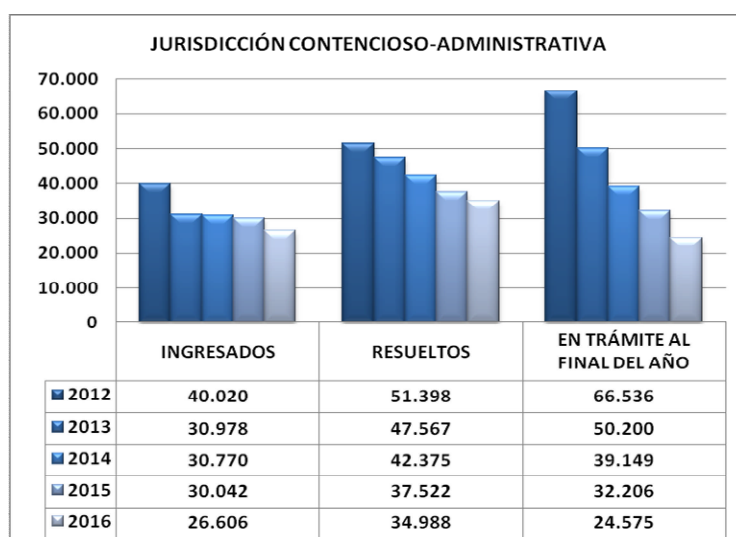
En el año 2015, cuando ingresaron ya un 1,2 por ciento menos de asuntos que en 2014, se registraron en la región un total de 1.372.977 asuntos.

Si comparamos las Comunidades Autónomas, sólo la de Andalucía, con unos ingresos anuales de 1.245.459 asuntos, y la de Cataluña, con 849.728 asuntos nuevos superan a Madrid.

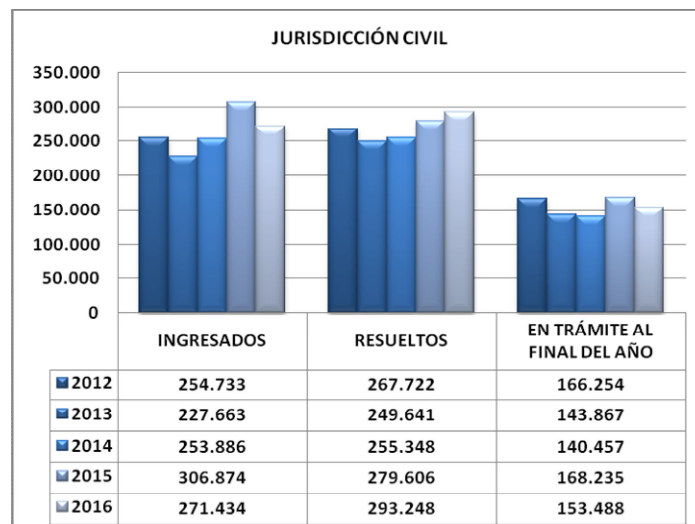
Por jurisdicciones, en el orden Social las entradas fueron 58.540, los asuntos resueltos fueron 62.689 y quedaron pendientes 35.969 procedimientos.



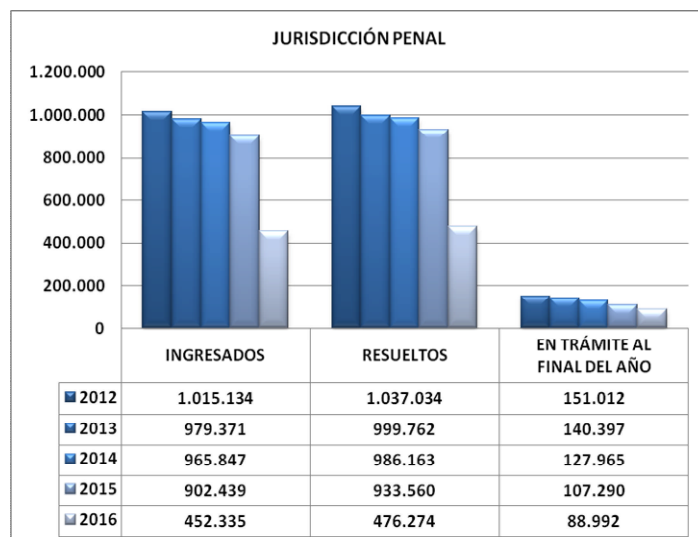
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 26.606 nuevos asuntos, quedaron pendientes 24.575 y se resolvieron 34.988, 8.382 más de los que entraron.



En el orden civil ingresaron 271.434 asuntos. Al acabar el año quedaron 153.488 y se resolvieron 293.248.



En el orden penal ingresaron 452.335 asuntos, se resolvieron 476.274 y quedaron pendientes 88.992 causas.



Junto a la reducción de entrada de asuntos, merece destacarse que se ha producido una mejora en la tasa de resolución (la relación entre los asuntos resueltos y los ingresados) en varias de las jurisdicciones: de un 18,6% en la Civil, de un 1,8% en la Penal, de un 3,5% en la Social, y de un 5,3% en la Contencioso-Administrativa; y que en segunda instancia se ha reducido el tiempo de respuesta judicial (la duración media

de los procedimientos) de 3,6 meses a 2,9 meses, si bien en Primera Instancia ha subido algo, de 3,2 a 4,7 meses,

El descenso continuo en la pendencia de asuntos evidencia el esfuerzo que realizan los juzgados y tribunales de la región dando salida a más asuntos de los que ingresan, pese a que en la Comunidad de Madrid hay sólo 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes y que a principios de año eran 11,7. Comunidades Autónomas con una menor carga de trabajo como Asturias tienen 14,8 jueces por cada 100.000 habitantes; Cantabria, 13,6; Castilla y León, 12,6 o Galicia, 12,4.

### **De nuevo, un año más, resulta necesario incrementar la planta judicial**

En respuesta a esta circunstancia, se ha solicitado para Madrid la puesta en marcha de quince juzgados de Primera Instancia, ocho juzgados de lo Penal, veinte juzgados de lo Social y seis juzgados de Mercantil. En el caso de Alcalá de Henares, se ha pedido la creación de dos juzgados de Primera Instancia y un juzgado de lo Penal. Para Alcobendas se precisan dos juzgados de Primera Instancia y uno de Instrucción; en Alcorcón, uno Mixto; en Aranjuez, uno Mixto y otro especializado en Violencia sobre la Mujer; en Arganda del Rey, dos Mixtos, al igual que en Collado Villalba; en Colmenar Viejo uno Mixto y otro especializado en Violencia sobre la Mujer; en Coslada, dos Mixtos; en Getafe, uno Mixto y otro de Lo Penal; en Majadahonda, uno especializado en Violencia sobre la Mujer; en Móstoles, siete de Primera Instancia, dos de Lo Penal y dos de la jurisdicción Social; en Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, Leganés y El Escorial, uno Mixto; en Torrejón de Ardoz, uno de Primera Instancia y uno de Instrucción y, por último, en Valdemoro, uno Mixto y otro especializado en Violencia sobre la Mujer.

En total, se ha reclamado la creación de 89 nuevos órganos judiciales para los veintiún partidos que conforman el mapa judicial de la comunidad. Además, se ha solicitado también la creación de 34/35 nuevas plazas de magistrados, cuatro de ellas para la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid y dos para la Sala de lo Social. También se considera imprescindible la creación de 13/14 plazas de magistrado para las secciones de lo Civil de la Audiencia Provincial y de quince para las secciones de lo Penal.

### **El atasco de asuntos, principal problema de los juzgados de lo Penal**

Los cuarenta y ocho juzgados de lo penal (31 en Madrid, seis en Alcalá de Henares, seis en Móstoles y cinco en Getafe) ingresaron un total de 22.067 asuntos y resolvieron 26.999, quedando pendientes 24.178. Los asuntos repartidos entre los treinta y un juzgados de lo penal de Madrid sin competencia en materia de ejecución han experimentado un descenso del 2,1%. Y al finalizar el año, estos juzgados tenían en trámite 15.606 asuntos, un 2,8 % menos que al inicio del ejercicio, que eran 16.061.

Sin embargo, el principal problema de muchos de estos órganos judiciales no es tanto la cifra de entrada de asuntos como la de casos pendientes de enjuiciar que arrastran como consecuencia de elevado número de causas repartidas en años anteriores, que en ocasiones hace que el tiempo de espera para enjuiciar llegue o incluso rebase los dos años desde que el procedimiento entra en el juzgado.

El atasco de asuntos se produce especialmente en los delitos de naturaleza económica (estafas, apropiaciones indebidas, delitos societarios etc...), al darse preferencia en el señalamiento a otros por la relevancia del bien jurídico protegido, o la existencia de medidas cautelares de carácter personal, con las indeseables consecuencias que ello conlleva, tanto a nivel económico como personal a las partes implicadas en ese tipo de procesos, en los que además la tardanza en su enjuiciamiento suele provocar en no pocas ocasiones que en las sentencias condenatorias se estime la concurrencia de atenuantes por dilaciones indebidas.

Además, la exigua plantilla con la que cuentan los juzgados de lo penal de Madrid no especializados, compuesta por un gestor, dos tramitadores y un funcionario de auxilio, da lugar a que cuando se produce una baja o vacante, la tardanza en cubrir la plaza y/o la inadecuación del funcionario interino con que se hace, compromete seriamente la actividad resolutoria del juzgado.

No se debe ignorar tampoco que pese a haber sido creados todos ellos a finales del año 1989 -y contar con la misma plantilla-, conviven juzgados atascados por su elevada pendencia, como el Juzgado de lo Penal nº 1 (que al acabar el año tenía pendientes de enjuiciar 1.470 asuntos, el nº 3, que tenía 955 o el nº 10 que tenía 832) con juzgados como el nº 18, con 101 asuntos pendientes de ser enjuiciados, el nº 25 con 116 asuntos, o el nº 27 con 196 asuntos.

Para intentar paliar este problema en los juzgados más atascados se constituyó a finales del año 2016 un refuerzo que en la actualidad está constituido por dos juezas de adscripción territorial, una letrada de la administración de justicia y diez funcionarios interinos, que ha comenzado a reforzar los Juzgados de lo Penal nº 1, 3 y 10, mediante la asignación mensual de 25 asuntos de nueva entrada por juzgado, de determinadas materias.

Esperamos que estas medidas puedan invertir la situación.

**De nuevo Madrid es la Comunidad donde se han presentado más demandas por despido y más asuntos por reclamaciones de cantidad**

En los **juzgados de lo social** las entradas se han reducido en un 5%, hasta los 52.343 asuntos. Además, se han resuelto 56.375 asuntos, reduciéndose la tramitación al acabar el año en un 13,5%, al rebajarse a 34.104 los 39.440 asuntos con que se inició el año 2016. Por Comunidades Autónomas, Madrid ha sido donde más demandas por despidos se presentaron durante el año 2016. Fueron 18.952, con una reducción del 2,4 % sobre el año anterior, en el que las demandas por este concepto alcanzaron la cifra de 19.412. Madrid se sitúa otro año más como la Comunidad con más demandas por despido, siguiéndola la de Cataluña con 17.931.

También ha sido Madrid la Comunidad donde mayor número de reclamaciones de cantidad se han presentado ante los juzgados de lo social, hasta un total de 21.159, con un descenso del 9,4 % respecto a 2015. La siguiente Comunidad con mayor número de reclamaciones de cantidad fue la de Andalucía, con 18.290.

La carga de trabajo soportada por los cuarenta y un juzgados de lo social de Madrid ha sido de 49.325 asuntos, con una reducción anual del 5.9% y una media por juzgado de 1.203 asuntos, mientras que la de los dos juzgados de lo social de Móstoles fue de 3.018, y una media por juzgado de 1.509 asuntos, lejos todavía de los 670-800 asuntos que según las tablas elaboradas por el Servicio de Inspección del CGPJ con fecha de 10 de octubre y 14 de diciembre de 2012, y aprobadas por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 19 de septiembre de 2013, que elevó a definitivo el modelo de medición de cargas de trabajo aprobado provisionalmente en el Pleno de 24 de enero de 2013, debería ser la carga asumible por un juzgado de lo social con ejecutorias.

Aunque el citado acuerdo del 19 de septiembre de 2013 fue declarado nulo en virtud de sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2014 por no haberse cumplimentado en su tramitación la audiencia previa al Ministerio Fiscal, ofrece una valiosa información como punto comparativo de referencia, por ser mucho más próxima en el tiempo la

medición de carga de trabajo que efectúa que la recogida en el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de octubre de 2003, que para los juzgados de lo social fija un indicador de entrada de 850 asuntos al año, razón por la que se considera que aunque solo sea a efectos meramente informativos, se debe hacer mención a ella a lo largo de este análisis.

Es por ello urgente que se aumente la planta de los juzgados de lo social de Madrid en al menos diez juzgados más, y la de Móstoles en un tercer juzgado habida cuenta de que la entrada de asuntos en los últimos años ha superado ampliamente tanto el indicador del Consejo General del Poder Judicial aprobado en 2003 para este tipo de órganos, como el informado por su Servicio de Inspección en el año 2012, hecho que ha supuesto una sobrecarga excesiva para los juzgados y como consecuencia, un importante retraso en la respuesta judicial.

**Los juzgados de lo Mercantil absorben una cantidad enorme de trabajo y hay que duplicar su número**

En los juzgados de lo mercantil, se invirtió la tendencia de aumento de los últimos años, y bajaron en un 7,9% las entradas, hasta los 9.645 asuntos. Los resueltos subieron en un 32%, alcanzándose los 10.151 asuntos y la pendencia al acabar el año se redujo en un 3,2%: quedaron 6.870 asuntos frente a los 17.436 con que se inició.

En cuanto a concursos, se presentaron 915, con un descenso del 7 % respecto al año anterior. Madrid es, tras Cataluña, la comunidad que ha registrado el mayor número de concursos. Sin embargo, el efecto de capitalidad del Estado y de población implica la atracción de tipos de procedimientos especiales, tanto cualitativamente (domicilio de sociedades cotizadas, concursos de gran tamaño y extensión territorial, acción colectivas de condiciones generales de la contratación...) como cuantitativamente. El número de juzgados de lo mercantil existentes, doce en total, resulta de todo punto insuficiente para asumir la carga de trabajo que reciben.

El Consejo General del Poder Judicial estableció en el año 2003 como módulo de entrada para un juzgado de lo mercantil, es decir como carga máxima de trabajo razonable, el de 350 asuntos por magistrado y año, cifra que el Servicio de Inspección moduló en su informe del año 2012 al establecer una horquilla comprendida entre 333 y 399 asuntos. Tanto se acoja uno como otro, la realidad pone de relieve que en el año 2016 se repartió más del doble del módulo máximo de entrada, en concreto 9.645

asuntos entre los doce juzgados de lo mercantil, con una media de 803,75 asuntos por magistrado y año.

Para absorber el número de asuntos y partiendo del arco más elevado de la horquilla (399 asuntos anuales), se necesitarían un total de 24 juzgados. Luego, los 12 juzgados existentes absorben y realizan el trabajo de los casi el doble que sería deseable que existieran conforme a los módulos propuestos por el CGPJ. Precisamente para combatir esta insuficiencia en la plantilla los doce juzgados de lo mercantil han contado durante 2016 con un refuerzo integrado por cuatro jueces de adscripción territorial y dos jueces de apoyo al JAT, si bien estos últimos finalizaron su labor en marzo y septiembre de 2016, cuando fueron destinados fuera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

**Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo reducen la pendencia más de un 30 por ciento, frente al 13 por ciento de media nacional**

El incremento espectacular en el número de asuntos producido entre los años 2004 a 2011 en la jurisdicción contencioso-administrativa y que provocó el colapso de estos juzgados en Madrid, hasta el punto de que a finales del año 2011 había un retraso acumulado que superaba los siete años (con 40.398 causas pendientes), se frenó finalmente en el año 2012, con una bajada del 37,91 % en el número de asuntos, y continuó en 2013 con otra bajada del 22,58 %.

Desde el año 2014 esa tendencia a la baja se había frenado, pero en el año 2016 se ha acentuado. El número de asuntos resueltos ha sido el año pasado de 23.383, por lo que quedaron a finales de año 14.870 frente a los 21.637 con que se inició, con una reducción anual del 31,3%, muy superior a la media que experimentaron los juzgados de lo contencioso administrativo a nivel nacional, que fue del 13,3%.

Hasta el mes de junio de 2016 hubo un plan de refuerzo con dos jueces de adscripción territorial. Su cometido fue el de dictar 35 sentencias en procedimientos ordinarios cada juez al mes, a razón de cinco por juzgado, de entre los catorce juzgados que presentaban mayor pendencia, a cambio de que éstos incrementaran los señalamientos de procedimientos abreviados. La suspensión del refuerzo se produjo al tener los jueces de adscripción territorial que pasar a desempeñar servicios de sustitución en juzgados, tal y como estaba previsto en el plan de refuerzo. Los juzgados reforzados por este sistema fueron los siguientes: 30, 16, 22, 21, 5, 13, 27, 29, 2, 26, 1, 3, 25



y 15. En el mes de diciembre se reactivó el refuerzo con un juez de adscripción territorial.

**Los juzgados de Instrucción declaran complejas más de 7.000 causas y esta circunstancia genera cierta preocupación**

En relación a la jurisdicción penal, los ochenta juzgados de instrucción de la región pasaron de recibir 542.710 asuntos en 2015 a registrar 238.405 en 2016. Y los noventa y dos juzgados de primera instancia e instrucción que en 2015 ingresaron 243.054 asuntos, en 2016 lo hicieron en número de 96.772. Esto supone un descenso del 56,1% y del 60,2% respectivamente, que a su vez se tradujo en una disminución del nivel resolutivo en un 55,4% en los juzgados de instrucción y de un 58,7% en los juzgados mixtos.

El descenso ha obedecido a la entrada en vigor el 6 de diciembre de 2015 de la reforma operada en el artículo 284 la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que dio lugar a que no se tengan que presentar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la autoridad judicial los atestados sin autor conocido, salvo supuestos excepcionales, lo que ha tenido impacto en el número de asuntos registrados, que se ha reducido notablemente, pero no en la labor habitual de los órganos instructores, ya que esos atestados al entrar en la oficina judicial daban lugar a un sobreseimiento provisional que no generaba más tramitación que el registro del asunto y el dictado de la referida resolución. Por eso la reducción de los asuntos en trámite al acabar el año no arrastra los mismos niveles, y aunque notable es muy inferior -de un 21,1% en los juzgados de instrucción-, que quedaron con 33.461 asuntos, y de un 28,5% en los juzgados de primera instancia e instrucción, que terminaron con 19.178.

También, aunque en menor medida, ha contribuido al descenso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, que ha supuesto la despenalización de buena parte de lo que constituían faltas contra las personas, derivando las lesiones de los procedimientos de accidentes de tráfico a la jurisdicción civil. Y por último, los plazos máximos de instrucción fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción dada por Ley 41/2015, de 5 de octubre, han incidido asimismo en una tramitación más ágil de las diligencias.

Este precepto ha venido a establecer que las diligencias de instrucción se practicarán en el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas, plazo que se ampliará a dieciocho meses – prorrogables- cuando el instructor, a instancia del Ministerio Fiscal, declare la instrucción compleja.

Durante el año 2016 los juzgados de instrucción y los juzgados de primera instancia e instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declararon compleja la instrucción en 6.999 asuntos, mientras que los juzgados de violencia sobre la mujer lo hicieron en 355 casos. Estos últimos juzgados han experimentado durante la pasada anualidad un incremento del 15,9% en los ingresos, con 29.442 asuntos penales, que se ha traducido también en un incremento de la pendencia de un 13,1%, de forma que el año acabó con 3.999 asuntos, frente a los 3.535 con que comenzó.

#### **El juzgado de 'cláusulas suelo' de Madrid soporta la mayor cifra de asuntos de todo el territorio nacional**

El Juzgado de competencia provincial especializado en los litigios relacionados con las acciones individuales generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (popularmente 'cláusulas suelo' o 'cláusulas abusivas') soporta desde su reciente creación una importante carga de trabajo. Las dos magistradas que lo dirigen tramitaron, sólo en el mes de junio (el primer mes de funcionamiento), un total de 2.803 demandas sobre condiciones generales de la contratación en las escrituras de créditos hipotecarios.

Según los datos de LexNET facilitados por el Ministerio de Justicia, la de Madrid es la mayor cifra de todo el territorio nacional, seguida de la de Barcelona, con 1.033 y Valencia, con 834.

La puesta en marcha de este órgano especializado, el Juzgado de Primera Instancia 101 Bis, tuvo lugar el pasado 1 de junio de este año, cuando entró en vigor el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces diseñó este plan ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas de esta naturaleza como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016.

El plan consiste en la especialización de un juzgado por provincia que conoce de los litigios que se refieren, entre otros, a 'cláusulas suelo'; vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multdivisa.

**Esperamos que el plan de choque de la Comunidad de Madrid para unificar sedes y paliar deficiencias en infraestructuras no tenga el mismo destino que las medidas precedentes**

En cuanto al estado de las sedes judiciales, ninguna mejora destacable se ha experimentado a lo largo del año 2016, sin que las múltiples y serias deficiencias que presentan puedan achacarse en exclusiva a las restricciones presupuestarias de los últimos años a la vista de las instalaciones y de los medios con que cuentan los organismos de la Administración autonómica, Administración a la que corresponde dotar de infraestructuras adecuadas, dignas y seguras a los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.

Una mera lectura de los informes de los presidentes y decanos que acompañan esta memoria, revela situaciones impropias de los órganos judiciales de una Comunidad Autónoma en la que se residencia la capital de un Estado de la Unión Europea.

Nuevamente se han de reiterar los graves problemas de toda índole que genera la dispersión de sedes judiciales: desde las molestias del desplazamiento de profesiones, testigos y peritos que deben acudir en una misma mañana a diversas sedes judiciales, lo que en ocasiones provoca suspensiones que su reagrupamiento en un solo edificio contribuiría a reducir, hasta la dificultad y retrasos en el reparto de asuntos o el incremento de gasto en vigilancia de tantas sedes que posiblemente sea la causa de su manifiesta insuficiencia en muchas de ellas, sin olvidar las serias dificultades que genera de cara a la sustitución ordinaria de jueces, magistrados, letrados de la administración de justicia y médicos forenses.

Mientras que hay ciudades de la justicia en Barcelona, Valencia o Málaga y están en proyectos las de Vigo y Badajoz, no hay previsión alguna de que la capital del Estado pueda contar con una en los próximos años. Ante esta decepcionante situación solo cabe exigir un reagrupamiento de las sedes, que en la actualidad se encuentran dispersas en la capital en 21 sedes. Otro tanto acontece con los veinte partidos judiciales del resto de la Comunidad Autónoma, que cuentan con un total de 38 sedes, algunas ubicadas en bajos de edificios de viviendas o en locales comerciales, siendo precisa la creación en muchos partidos de palacios de justicia que alberguen a todos los juzgados en un solo edificio, dado el coste personal y

económico que supone la actual dispersión, y el estado de algunos edificios judiciales sin las mínimas condiciones de seguridad estructural, que en ocasiones albergan dependencias que carecen de ventilación y presentan deficiencias en los sistemas eléctricos y de climatización, archivos insuficientes con espacios muy reducidos, calabozos minúsculos, etc. Hasta tanto ello ocurra se deben aprobar partidas presupuestarias suficientes y realistas para evitar el deterioro progresivo de las sedes judiciales y permitir un mantenimiento seguro, que incluya un aumento y mejora de los servicios de seguridad y limpieza en todos los edificios.

Las deficiencias en las sedes judiciales no solo se ponen de manifiesto en los informes de los presidentes y decanos que se incorporan como anexos a esta memoria. Así por ejemplo, el propio Servicio de Inspección del CGPJ señala con motivo de las inspecciones realizadas que el edificio en el que se ubican los cuarenta y un juzgados de lo social de Madrid no se considera adecuado para una jurisdicción que moviliza a diario una gran cantidad de personas entre particulares y profesionales, con espacios pequeños, tanto los dedicados al trabajo de los órganos, que limitan la capacidad para desenvolverse de los funcionarios, como los espacios comunes (entrada, pasillos, salas de espera, etc.), carencia de dependencias para atender a público y profesionales de forma adecuada, ascensores e instalaciones insuficientes para dar servicio a la importante afluencia de público que se produce de lunes a jueves, aparte de oficinas como la del Juzgado de lo Social nº 10, donde no hay luz natural ni ventilación.

La escasez de salas de vistas, compartidas en su inmensa mayoría por varios órganos judiciales, condiciona la capacidad de celebrar vistas y juicios, siendo muchas veces su estado inadecuado para la labor que en ellas se desarrolla, como ocurre en las salas de vistas de Gran Vía nº 19 de Madrid, donde se ubican veintisiete juzgados de lo contencioso administrativo y que son excesivamente pequeñas, especialmente las situadas en la planta baja del edificio, que no reúnen las condiciones físicas y ambientales necesarias para realizar en ellas juicios a lo largo de toda una mañana, por el calor, ruido, falta de espacio e imposibilidad de ventilación que presentan al carecer de ventanas.

Por su parte, las salas de espera incumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de la Víctima del Delito, que exige que las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, estén dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre víctima y familiares por un lado, y el sospechoso de haber cometido la infracción por otro.

Lejos de ello, las salas de espera de las sedes judiciales madrileñas facilitan el contacto visual entre víctimas y acusados, que se ven obligados convivir en el mismo espacio, dando lugar a situaciones indeseables, especialmente en la celebración de los juicios orales. Y lo que resulta aún más grave, no solo las salas existentes con anterioridad a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima no se han adaptado a la nueva exigencia legal, sino que las escasas dimensiones de la sala de espera habilitada en el año 2016 para el refuerzo de los Juzgados de lo Penal nº 1, 3 y 10 de Madrid en el nº 39 de la calle Hermanos García Noblejas, fomenta el contacto visual y la proximidad física de víctimas y acusados, con total desprecio a la legalidad vigente.

Faltan en muchos partidos judiciales salas para la práctica de ruedas de reconocimiento, y en los que las hay, algunas cuentan con notables deficiencias para las personas que deben hacer los reconocimientos. Y se sigue incumpliendo la legislación en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad en espacios públicos, por ausencia de rampas o de ascensores. La mayor parte de los edificios judiciales no están adaptados para personas con minusvalías físicas, lo que afecta tanto a los ciudadanos que acuden a los juzgados como a los profesionales que trabajan en ellos.

Las deficiencias en materia de seguridad se proyectan en diversos ámbitos, desde sedes judiciales sin vigilancia las 24 horas que no cuentan con sistemas de detección de intrusos en horas en las que no está cubierto el servicio de seguridad, a sedes en las que faltan alarmas anti-incendios o las que hay no funcionan. Tampoco hay medidas de seguridad en la custodia de los procedimientos en trámite que se guardan en armarios y estanterías abiertas y pueden ser sustraídos con relativa facilidad. Recientemente el Servicio de Inspección del CGPJ, con motivo de la inspección del Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, reflejó en su informe que la configuración de las oficinas judiciales en los juzgados de lo social de Madrid en grandes salas abiertas que comparten un número importante de juzgados, posibilita que se pueda acceder desde cualquiera de los juzgados de la planta al resto de los mismos, sin que haya ninguna medida de seguridad en relación con los expedientes.

Los problemas de climatización como consecuencia de equipos de calefacción y refrigeración viejos y con frecuentes averías, son habituales. A las altas temperaturas que por este motivo se han soportado en periodo estival en varios edificios judiciales se unen los de bajas temperaturas durante los meses de invierno

que, como en el caso de algunas dependencias del edificio judicial del Arganda del Rey fueron parcialmente paliadas a finales de 2016 en que se colocaron unas cortinas de aire en las puertas de acceso al edificio. Pero no ha sido así en otros como el de los calabozos y celdas de la sede de los juzgados de Menores en la calle Hermanos García Noblejas nº37 de Madrid que carecen de calefacción.

En otros casos es la falta de ventilación y de oxigenación la que repercute negativamente en la salud de los funcionarios que trabajan en tales dependencias, como ya puso de manifiesto el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, de fecha 7 de marzo de 2013, respecto del el espacio destinado a la oficina judicial en la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la calle General Castaños nº 1, donde se ubica la sede de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, haciendo constar que la concentración de dióxido de carbono superaba los límites establecidos, pese a lo cual esta situación no se ha sido solventada.

En la reunión celebrada el 4 de febrero de 2015 por los jueces decanos de la Comunidad de Madrid con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se denunció la alarmante situación de desatención y dejación en que el Gobierno regional mantenía a los juzgados al no cubrir de plazas vacantes de funcionarios, así como por el abandono de las sedes judiciales y ausencia en éstas de las mínimas condiciones de seguridad y salubridad exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales.

El 25 de enero de 2017 los jueces decanos de los veinte partidos judiciales de la periferia de Madrid remitieron un escrito para ser trasladado a la Consejería de Justicia, en el que a través de la elaboración de un plan de justicia, con una programación de planes de actuación y plazos de ejecución formulaban diversas peticiones, buena parte de las cuales ya se reclamaron con motivo de la reunión del año 2015. El que dos años después de esa reunión se vuelvan a reclamar gran parte de las mismas peticiones, pone de manifiesto el escaso interés con que se han afrontado los problemas de la justicia por parte de la Administración autonómica.

La relación de peticiones de los jueces decanos con motivo del incendio que tuvo lugar en enero de este año en una de las sedes de los juzgados de Torrejón, y que puede considerarse el detonante de la últimas reclamaciones, ha tenido su acogida en los medios de comunicación y es de todos conocida, y desde entonces el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha comprometido en un plan de choque que incluye medidas a medio y largo plazo con dos fases diferenciadas por la disponibilidad económica para las mismas.

Una primera fase para actuaciones consideradas de emergencia cuya solución pudiera ser materializada en un periodo de seis meses por su cuantía económica a través de la adjudicación de contratos menores y que comprendería actuaciones de mantenimiento de sedes, de seguridad laboral y de reubicación de sedes para dejar sentadas las bases para el traslado de aquellas que por su antigüedad, elevada ocupación u obsolescencia de las instalaciones y dificultades para cumplir con la normativa sobre accesibilidad no soportan ya ningún tipo de actuación que no implique, al menos, un desalojo parcial de las mismas.

Y una segunda fase, una vez aprobados los presupuestos, en la que se concretarían las actuaciones de inversión que se pretenderían acometer en la construcción de edificios, modernización de las infraestructuras de sedes judiciales y actuaciones de mejoras y reforma de inmuebles.

Como objetivo recogido en el citado plan se ha planteado la agrupación de las sedes judiciales de Móstoles y Torrejón, creando en ambos partidos judiciales un único edificio que albergue a todos los órganos judiciales y la agrupación de las sedes de Madrid capital en varios ejes principales. Uno buscaría que los órganos unipersonales penales, dispersos entre las sedes de la Plaza de Castilla, y las calles Hermanos García Noblejas, Manuel Tovar y Julián Camarillo, se concentren en la sede de la Plaza de Castilla, y en otra única zona de Madrid, en las inmediaciones de Julián Camarillo.

Otro, agruparía las secciones civiles y penales de la Audiencia Provincial, trasladando las civiles al edificio más próximo al lugar donde se sitúan las secciones de penal de la calle Santiago de Compostela, y un tercero, para los juzgados civiles, que se agruparían y aproximarían al entorno de la sede de la calle Capitán Haya nº 66 de Madrid.

Solo nos queda agradecer el esfuerzo y el compromiso del gobierno regional y encomendarnos al tiempo, que nos dirá si estos proyectos se materializan y en qué número e intensidad o si siguen el mismo destino de los anteriores, de los que la construcción de una Ciudad de la Justicia en Madrid fue el más destacado, por el objetivo perseguido y por su estrepitoso fracaso.

**Algunas decisiones de la Sala de Gobierno del TSJ de Madrid están detrás del mejor funcionamiento de los juzgados con más problemas**

En esta mejora global de la situación de los juzgados y tribunales de Madrid han influido decisivamente los refuerzos propuestos por la Sala de Gobierno del TSJ. Los diez jueces de adscripción territorial (JAT) que, junto a cinco letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y 34 funcionarios, han reforzado los juzgados de lo social de Madrid, y el JAT y el funcionario adscrito a los Juzgados de lo Social de Móstoles, han permitido reducir significativamente los asuntos pendientes en esta jurisdicción.

Los dos JAT adscritos a los Juzgados de lo Penal especializados en asuntos de Violencia sobre la Mujer han permitido afrontar la ingente carga de trabajo que soportan. El JAT, dos LAJ y ocho funcionarios que han reforzado los Juzgados de lo Penal de Alcalá de Henares para hacerse cargo de sus ejecutorias han logrado invertir la tendencia de creciente aumento de la pendencia en estos juzgados que venía ocurriendo en los últimos años.

El JAT, el LAJ y los cuatro funcionarios adscritos a los Juzgados de lo Penal de Móstoles han permitido reducir también el número de asuntos en tramitación. Las comisiones de servicio sin relevación de funciones y los dos JAT aprobados para las Secciones Penales de la Audiencia Provincial han posibilitado afrontar la celebración de varios juicios orales de especial complejidad y duración (casos Madrid-Arena, Cartas Nigerianas, Ciudad Lineal, entre otros), sin incrementar la pendencia en las secciones afectadas, que han podido afrontar con normalidad el resto de los asuntos de su competencia.

Las comisiones de servicio de tres magistrados sin relevación de funciones para afrontar la resolución de los recursos que se interpusieran contra decisiones de magistrados instructores de la Sala Civil y Penal del TSJ ha evitado el riesgo de "contaminación procesal" de los magistrados titulares de esta Sala, que necesariamente habría provocado su abstención en la celebración de los correspondientes juicios orales.

La jueza de apoyo que ha reforzado el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid ha contribuido a rebajar la preocupante pendencia que presenta este juzgado. Los dos JAT, dos LAJ y 10 funcionarios que han reforzado los Juzgados de lo Penal nº 1, 3 y 10 de Madrid permitirán reducir el número de asuntos en trámite en estos tres juzgados,



los de situación más delicada. Los seis JAT adscritos a los Juzgados de lo Mercantil han contribuido al aumento del nivel resolutivo en estos juzgados. Y los dos JAT, posteriormente reducido a uno solo, adscritos a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo también han cooperado a reducir el tiempo de respuesta en alguno de estos juzgados.

### **Ya se han superado las dificultades iniciales en la notificación telemática**

Durante el año 2016 se han dado pasos significativos en el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Se ha consolidado la implantación del sistema de notificaciones y de presentación telemática de escritos y documentos vía Lexnet, en un proceso que ha estado salpicado de dificultades y deficiencias derivadas en gran parte de la precipitación con que se puso en marcha el sistema de presentación y notificación telemática como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con unos sistemas informáticos que como los del Ministerio de Justicia y de la Comunidad de Madrid eran incompatibles, con unos equipos informáticos insuficientes e inadecuados, y con una deficiente formación a los letrados de la Administración de justicia y funcionarios, que provocó reiterados y graves problemas en el registro y reparto de asuntos especialmente notables en los primeros meses del año 2016.

Aunque aún persisten los problemas, son puntuales y ha mejorado la situación en relación con el momento inicial y así, a fecha de 31 de diciembre de 2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se habían practicado por vía telemática 3.440.737 notificaciones, enviado 269.402 escritos iniciadores de asuntos y 1.403.927 escritos de trámite, y recibido 27.137 personaciones. En lo que va de año 2017 y hasta el 25 de abril, las notificaciones realizadas a través de la aplicación Lexnet eran 2.258.194, los escritos iniciadores recibidos 94.935, los escritos de trámite 614.008 y las personaciones 13.955, mientras que los partes hospitalarios ascendían a 456 y los atestados a 69.

